



BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

II LEGISLATURA

Serie A:
PROYECTOS DE LEY

21 de septiembre de 1983

Núm. 56-I

PROYECTO DE LEY

Regulación del procedimiento de «Habeas Corpus» (Orgánica).

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara, remitir a la Comisión Constitucional y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES el Proyecto de Ley Orgánica reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».

Los señores Diputados y los Grupos Parlamentario disponen de un plazo de quince días hábiles que expira el 8 de octubre para presentar enmiendas al citado Proyecto de Ley, cuyo texto se inserta a continuación.

Asimismo, la Mesa de la Cámara ha acordado acumular para dictamen único el citado Proyecto de Ley Orgánica y la Proposición de Ley Orgánica, tomada en consideración, del Grupo Parlamentario Vasco, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 1983.—P. D., El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Luis María Cazorla Prieto**.

PROYECTO DE LEY ORGANICA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE «HABEAS CORPUS»

Exposición de motivos

El constitucionalismo moderno tiene un objetivo fundamental, que constituye, al mismo tiempo su raíz última: el

reconocimiento y la protección de la vida y la libertad de los ciudadanos. Las constituciones que son verdaderamente tales se caracterizan, precisamente, porque establecen un sistema jurídico y político que garantiza la libertad de los ciudadanos y porque suponen, por consiguiente, algo más que una mera racionalización de los centros de poder.

Nuestra Constitución ha configurado, siguiendo esa línea, un ordenamiento cuya pretensión máxima es la garantía de la libertad de los ciudadanos, y ello hasta el punto de que la libertad queda instituida, por obra de la propia Constitución, como un valor superior del ordenamiento. De ahí que el texto constitucional regule con meticulosidad los derechos fundamentales, articulando unas técnicas jurídicas que posibilitan la eficaz salvaguarda de dichos derechos, tanto frente a los particulares como, muy especialmente, frente a los poderes públicos.

Una de estas técnicas de protección de los derechos fundamentales —del más fundamental de todos ellos: el derecho a la libertad personal— es la institución del «Habeas Corpus». Se trata, como es sabido, de un instituto propio del Derecho anglosajón, donde cuenta con una antiquísima tradición y se ha evidenciado como un sistema particularmente idóneo para resguardar la libertad personal frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del poder público. Su origen anglosajón no puede ocultar, sin embargo, su raigambre en el Derecho histórico español, donde cuenta con antecedentes lejanos como el denominado «recurso de manifestación de personas» del Reino de Aragón, así como con antecedentes más próximos en las Constituciones de 1869 y 1876, que regulaban este procedimiento, aun cuando no le otorgaban denominación específica alguna.

El «Habeas Corpus» ha demostrado históricamente su funcionalidad para proteger la libertad de los ciudadanos. De ahí que la Constitución, en el número 4 del artículo 17,

recoja esta institución y obligue al legislador a regularla, completando, de esta forma, el complejo y acabado sistema de protección de la libertad personal diseñado por nuestra norma fundamental. La regulación del «Habeas Corpus» es, por consiguiente, un mandato constitucional y un compromiso de los poderes públicos ante los ciudadanos.

La pretensión del «Habeas Corpus» es establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales. Por consiguiente, el «Habeas Corpus» se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento, y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención o las condiciones de la misma, al objeto de que el Juez resuelva en definitiva sobre la conformidad a Derecho de la detención.

La eficaz regulación del «Habeas Corpus» exige, por tanto, la articulación de un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir la inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de la detención, y lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos los ciudadanos y permita, sin complicaciones innecesarias, el acceso a la autoridad judicial.

Estos son los objetivos de la presente Ley Orgánica, que se inspira para ello en cuatro principios complementarios. El primero de estos principios es la agilidad, absolutamente necesaria para conseguir que la violación ilegal de la libertad de las personas sea reparada con la máxima celeridad, y que se consigue instituyendo un procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rápido, hasta el punto de que tiene que finalizar en veinticuatro horas. Ello supone una evidente garantía de que las detenciones ilegales, o mantenidas en condiciones ilegales, finalizarán a la mayor brevedad.

En segundo lugar, la sencillez y carencia de formalismos, que se manifiestan en la posibilidad de la comparecencia verbal y en la no necesidad del Abogado y Procurador, evitarán dilaciones indebidas y permitirán el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de conocimiento de sus derechos y de sus medios económicos, al recurso de «Habeas Corpus».

En tercer lugar, el procedimiento establecido por esta Ley se caracteriza por la generalidad, que implica, por un lado, que ningún particular o agente de la autoridad puede sustraerse al control judicial de la legalidad de la detención de las personas, sin que quepa en este sentido excepción de ningún género, ni siquiera en lo referente a la Autoridad Militar, y que supone, por otro lado, la legitimación de una pluralidad de personas para instar el procedimiento, siendo de destacar a este respecto la legitimación conferida al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo como garantes, respectivamente, de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos.

En fin, la Ley está presidida por una pretensión de universalidad, de manera que el procedimiento de «Habeas Corpus» que regula alcanza no sólo a los supuestos de de-

tención ilegal —ya porque la detención se produzca contra lo legalmente establecido, ya porque tenga lugar sin cobertura jurídica—, sino también a las detenciones que, ajustándose originariamente a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales.

Parece fuera de toda duda que la regulación de un procedimiento con las características indicadas tendrá una enorme importancia en orden a la protección de la libertad de las personas, así como que permitirá añadir un eslabón más, y un eslabón importante, en la cadena de garantías de la libertad personal que la Constitución impone a nuestro ordenamiento. España se incorporará, con ello, al reducido número de países que establecen un sistema acelerado de control de las detenciones o de las condiciones de las mismas.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia e Interior, el Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de 1983, acordó remitir a las Cortes Generales el siguiente Proyecto de Ley:

ARTICULO UNO

Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus» regulado en la presente Ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.

A los efectos de esta Ley se consideran ilegalmente detenidos:

- a) Las personas que lo fueren por una Autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurren los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes.
- b) Las personas que estén ilícitamente internadas contra su voluntad en cualquier establecimiento o lugar.
- c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes si, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
- d) Aquellos privados de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida.

ARTICULO DOS

Es competente para conocer de la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de Instrucción del lugar en que se produjo la detención; si no constare, el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; y en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.

Si la detención obedece a la aplicación de la Ley Orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución, el procedimiento deberá seguirse ante el Juez Central de Instrucción correspondiente.

En el ámbito de la Jurisdicción Militar, será competente para conocer de la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la detención.

ARTICULO TRES

Podrán iniciar el procedimiento de «Habeas Corpus» que esta Ley establece:

- a) De oficio, el Juez Competente a que se refiere el artículo anterior.
- b) El Ministerio Fiscal.
- c) El Defensor del Pueblo.
- d) El detenido, su cónyuge, ascendientes, descendientes y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.

ARTICULO CUATRO

Salvo cuando el procedimiento se incoe de oficio, éste se iniciará por medio de escrito o comparecencia verbal, sin que sea preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador, debiendo, en todo caso, hacerse constar:

- a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el «Habeas Corpus».
- b) Lugar en que se halle el privado de libertad, Autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y cualesquiera otras circunstancias que pudieran resultar relevantes.
- c) Motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus».

ARTICULO CINCO

La Autoridad gubernativa, Agente de la misma, o funcionario público, estarán obligados a poner en conocimiento inmediato del Juez competente la solicitud de «Habeas Corpus», formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia.

Si incumplieren esta obligación, serán apercibidos de plano por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias en que pudieran incurrir.

ARTICULO SEIS

El Juez, mediante auto, podrá ordenar la incoación del procedimiento o, en su caso, denegar la solicitud de «Habeas Corpus» por ser éste improcedente. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno.

ARTICULO SIETE

En el auto de incoación, el Juez ordenará a la autoridad a cuya disposición se halle la persona privada de libertad o al sujeto en cuyo poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, sin pretexto ni demora alguna o se constituirá en el lugar donde aquélla se encuentre.

Antes de dictar resolución, oirá el Juez a la persona privada de libertad, así como a su representante y Abogado, si lo hubiera designado; acto seguido oirá en justificación de su proceder a la autoridad, agente, funcionario público o representante de la Institución o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento o, en todo caso, a aquella bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad, y después, si compareciese, al representante del Ministerio Fiscal; a todos ellos dará a conocer el Juez las declaraciones del privado de libertad.

El Juez admitirá, si las estima pertinentes, las pruebas que aporten las personas a que se refiere el párrafo anterior y las que propongan que puedan practicarse en el acto.

ARTICULO OCHO

Practicadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el Juez adoptará seguidamente mediante Auto, alguna de las resoluciones siguientes:

1. Si estimare que no se da ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 1.º de esta Ley, acordará el sobreseimiento, con archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a Derecho la privación de libertad, y las circunstancias en que se está realizando.
2. Si estimare que concurren alguna de las circunstancias del artículo 1.º de esta Ley, se acordará en el acto alguna de las siguientes medidas:

- a) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente.
- b) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, y bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la detentaban.
- c) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiere transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención.

En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de admisión, los Jueces practicarán todas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior y dictarán la resolución que proceda.

ARTICULO NUEVE

El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los delitos que

hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención, o tenido bajo su custodia a la persona privada de libertad.

En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito, se deducirá, asimismo, testimonio de los particula-

res pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, será condenado el solicitante al pago de las costas del procedimiento; en caso contrario, éstas se declararán de oficio.

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 - 1961